



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 017 2022 00327 01

Proceso: Declarativo - acción redhibitoria
Demandante: RUBÉN DARÍO CHAVERRA RODAS (C.C. 15'333.848).
Demandado: LUIS ROGELIO GONZÁLEZ ARCILA (C.C. 3'514.180).
Extracto: La notificación personal y las exigencias para su práctica virtual, así como de las gestiones del demandante, y las contradicciones del recurrente en aras de lograr el efecto jurídico perseguido. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto calendado el quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), proferido por el JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

En auto del 2 de noviembre de 2.022 se admitió la acción de la referencia¹, ante la que el 10 de abril hogaño (2.023) el demandado allegó contestación proponiendo excepciones de mérito, adicionalmente que formuló demanda de reconvencción².

¹ Archivo 25 del Cuaderno Principal (C.P.).

² Archivo 40 ídem.

Mediante el auto recurrido se incorporaron tales escritos, pero se dijo que son extemporáneos, ya que el demandado fue notificado electrónicamente desde el 8 de noviembre de 2.022³.

Frente a tal decisión el demandado presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que es un hombre del campo y que hace “*más de 2 años*” vive en la zona rural del municipio de Támesis (Antioquia), donde no existe acceso a internet, por lo que destacó que el correo electrónico no es su medio de comunicación.

Resaltó que el correo donde presuntamente fue enterado, “... *no lo sabe abrir, no lo sabe manejar, no sabe ingresar en él ...*”, pues este fue creado por un tercero dada la exigencia de la Notaria 31 del Círculo de Medellín para finiquitar el negocio jurídico hoy cuestionado, y que este pleito lo conoció el 8 de marzo de 2.023 ya que un amigo abogado consultó el Sistema Judicial, siendo su interés demostrar que vendió de buena fe, para lo que necesita ejercer su derecho de defensa⁴.

Previo a resolver hubo prueba de oficio⁵; para luego en providencia del 9 de agosto de 2.023 mantener la decisión⁶, explicándose que la notificación al demandado se realizó en los términos de la Ley 2213 de 2.022 y en la dirección “*gonzalesluisrogelio@gmail.com*”, de lo cual existe acuse de recibido, y si bien el recurrente adujo que no utiliza ese correo, fue desde ahí que otorgó poder a su abogado.

Agregó que según la demanda, en ese mismo correo se informó al demandado sobre la citación para la conciliación prejudicial, a la que en

³ Archivo 42 C.P.

⁴ Archivo 43 igual.

⁵ En auto del 6 de junio de 2.023 se resolvió: *De conformidad con el artículo 169 del C.G. del P., se decreta la siguiente prueba de oficio, para la resolución del recursos interpuesto en contra del auto que rechazo por extemporánea, la contestación: ... Prueba por informe (artículo 275 C.G. del P). Se solicita al Juzgado Once (11º) Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, con respecto a la demanda ejecutiva presentada por Luis Rogelio González Arcila CC 3.514.848 contra Rubén Darío Chaverra Rodas CC 15.333.848, radicado 05001 31 03 011 2022 00176 00 (c1, pdf 041, pag 53 del expediente digital), se sirva informar: ... 1.- La dirección física y electrónica del ejecutante Luis Rogelio González Arcila, anotada en la demanda... 2.- Nombres, apellidos, tarjeta profesional y dirección electrónica del apoderado judicial del ejecutante.*” (sic). Archivo 45 C.P.

⁶ Archivo 52 C.P.

efecto acudió con dicho apoderado; en igual escrito se anotó que el accionado se ubica en “*Medellín, Unidad Residencial Veleros, carrera 82 A nro. 26-37, apartamento 1602*”, dirección esta que coincide con la informada en la demanda ejecutiva que este inició contra el hoy demandante (tramitada en el Juzgado Once Civil del Circuito, radicado 05001 31 03 011 2022 00176 00, ver prueba de oficio), y con la anotada en la Escritura Pública 1.146 del 16 de marzo de 2.017 de la Notaria 19 del Círculo de Medellín, donde adicionalmente se apuntó que el recurrente es trabajador “*INDEPENDIENTE*”, sin que refiera a que se dedique a actividades agrícolas o resida en zona rural.

Finalmente, en el escrito de contestación arrimado y que se quiere sea tenido en cuenta, el propio demandado anotó igual correo electrónico para efectos de notificación. Subsidiariamente concedió la alzada.

Remitido el asunto a esta Corporación, atendiendo que la providencia censurada es apelable conforme al artículo 321.1 del C. G. del P., se resuelve de plano, tal como lo prevé el artículo 326 ibídem, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 procesal civil.

Sobre la notificación y las exigencias de su práctica virtual:

La notificación es un acto procesal necesario y elemental para proteger las garantías del debido proceso y garantiza a los extremos procesales, particularmente al demandado, el ejercicio pleno de su derecho de defensa, por lo que al respecto la Corte Constitucional ha referido:

“(…) la debida notificación es un ejercicio judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad. Este principio, como lo definió la sentencia C-980 de 2010, tiene la finalidad de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho de defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, entonces, la notificación, más que pretender formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y proteger las garantías procesales intrínsecamente relacionadas con el derecho a la defensa”. (Sentencia T 397 de 2.015).

Valga anotar que el artículo 290 del C. G. del P., en su parte pertinente dispone: “Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones:

1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo...”, subrayado adrede, para lo cual rige el C.G. del P. (arts. 291 y 292), y la Ley 2213 de 2.022.

Sobre el punto, recientemente la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia explicó:

“[E]s menester recordar que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha definido que en tratándose de la notificación personal, a partir de la expedición del Decreto 806 de 2020, replicado en la Ley 2213 de 2022, la parte interesada en practicar dicho medio de enteramiento procesal, *«tiene dos posibilidades (...). La primera, notificar a través de correo electrónico, como lo prevé el canon 8° de ese compendio normativo. Y, la segunda, hacerlo de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. Dependiendo de cuál opción escoja, deberá ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma»* (CSJ STC7684-2021, 24 jun., rad. 00275-01).

“(…). En reciente pronunciamiento, además de afianzar la posibilidad de opción que tienen los sujetos procesales para realizar la notificación personal, la Sala se pronunció sobre los canales de notificación y otros aspectos atinentes a la notificación virtual, refiriendo sobre las *exigencias jurídicas* para su realización y *demonstración probatoria*, que:

“(…) i). *En primera medida -y con implícitas consecuencias penales- exigió al interesado en la notificación afirmar «bajo la gravedad de juramento (...) que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar»;* además, para evitar posibles discusiones, consagró que ese juramento *«se entenderá prestado con la petición»* respectiva.

“ii). *En segundo lugar, requirió la declaración de la parte tendiente a explicar la manera en la que obtuvo o conoció del canal digital designado.*

“iii). *Como si las dos anteriores no resultaran suficientes, impuso al interesado el deber de probar las circunstancias descritas, «particularmente», con las «comunicaciones remitidas a la persona por notificar».*

“*De lo expuesto, no queda duda que las partes tienen la libertad de escoger los canales digitales por los cuales se comunicarán las decisiones*

adoptadas en la disputa, sea cual sea el medio, siempre que se acrediten los requisitos legales en comento, esto es, la explicación de la forma en la que se obtuvo -bajo juramento, por disposición legal- y la prueba de esas manifestaciones a través de las «comunicaciones remitidas a la persona por notificar».

“Tampoco hay vacilación al indicar que esa elección, al menos en la etapa inicial del proceso, compete al demandante quien debe demostrar la idoneidad del medio escogido, sin perjuicio de que se modifique en el curso del proceso, conforme lo permiten los numerales 5° de los artículos 78 y 96 del Código General del Proceso y el canon 3° de la Ley 2213 de 2022.

“(…) Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo –que no es otra cosa que la constatación de que la misiva llegó a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en el trámite de nulidad o por fuera de él. (...)» (CSJ 16733-2022, 14 dic., rad. 00389-01). Comillas y cursivas en el texto original, corchete fuera de él. STC4737-2023.

Como se observa, el enteramiento es un acto fundamental y está debidamente regulado, lo cual se sigue estudiando considerando que los escritos allegados por el demandado (contestación y demanda de reconvención), procedían dentro del término de traslado de la demanda, así deriva de los artículos 91, 96, 369 y 371 del Estatuto Procesal Civil.

Solución al caso:

Una vez admitida la demanda⁷ el actor inició las gestiones para notificar al demandado bajo la modalidad “*virtual*”, por lo que el 15 de noviembre de 2.022 acreditó el enteramiento que realizó el día 8 de ese mes y año en el correo electrónico “*gonzalesluisrogelio@gmail.com*”, de lo que aportó acuse de recibo dimanado de empresa de correo certificado⁸.

Tales actuaciones satisfacen a cabalidad lo exigido por la norma que para tal propósito acogió el demandante⁹.

No obstante, dicho enteramiento es desconocido por el recurrente, quien presentó inconformidades como atrás se expuso, a lo que el *a quo* hizo el correspondiente estudio, estando acreditado que desde el correo

⁷ Archivo 25 C.P.

⁸ Archivos 26-34 C.P.

⁹ En la demanda se afirmó que ese es el correo utilizado por el demandado, indicándose también cómo se obtuvo, ver acápite de notificaciones en la acción integrada, archivo 12 C.P., información reiterada en los folios del archivo 37 ídem.

donde se notificó al demandado (gonzalesluisrogelio@gmail.com), fue de donde este otorgó poder a su abogado judicial¹⁰, situación esta que contradice lo argüido en los recursos, a lo que se suma lo informado para efectos de su notificación en los escritos que él mismo allegó – contestación y demanda de reconvención-, en los que anotó:

NOTIFICACIONES:

Para efectos de notificaciones las siguientes:

APODERADO: El apoderado judicial del señor. LUIS ROGELIO GONZALEZ ARCILA, recibirá notificaciones en el siguiente correo electrónico. Fabiog24@hotmail.com / Celular: 3217683602 mismo para WhatsApp.

EL DEMANDADO: El señor. LUIS ROGELIO GONZALEZ ARCILA, recibirá notificaciones en el siguiente correo electrónico: gonzalesluisrogelio@gmail.com / Celular: 3103947101, mismo para WhatsApp

Bajo tal panorama quedó en entredicho la afirmación del recurrente sobre que el correo electrónico en cita no es su medio de comunicación, o que *“no lo sabe abrir, no lo sabe manejar, no sabe ingresar en él”*. Es más, al parecer tiene otras direcciones, ya que en los anexos a la demanda, específicamente en el *“ACTA DE COMPARECENCIA N° 01”* dimanada de la Notaría 31 del Círculo de Medellín, el hoy demandado brindó el siguiente *“luisrogeliogonzales@gmail.com”*¹¹; mientras que en la acción ejecutiva que radicó frente a CHAVERRA RODAS informó el *“gonzalezluisrogelio@gmail.com”*¹².

En tal demanda ejecutiva también se dijo que GONZÁLEZ ARCILA está domiciliado en Medellín, y que se le ubica en la *“Carrera 82 A Numero. 26 – 37 Apto 1602 Medellín – Antioquia”*, lo cual coincide con lo expresado en el poder que atrás referimos, igualmente en: 1) la citada acta de comparecencia; 2) la promesa de compraventa suscrita con el demandante¹³; y, 3) la Escritura 1.146 del 16 de marzo de 2.017 de la Notaria 19 de Medellín, esta arrimada como anexo a la demanda¹⁴.

¹⁰ Folio 2 del archivo 39 C.P.

¹¹ Folio 49 del archivo 13 C.P.

¹² Archivo 48 C.P., que corresponde a la respuesta frente a la prueba de oficio practicada en primera instancia.

¹³ Folio 53-56 archivo 13 C.P.

¹⁴ Folios 51-59 del archivo 15 C.P.

Con los anteriores argumentos se confirmará la decisión apelada, debiéndose agregar que frente a lo que es objeto de alza en nada influye la ocupación del demandado, lo relevante es la notificación que se acreditó se le hizo desde el 8 de noviembre de 2.022, y de donde deriva que los escritos del 10 de abril de 2.023 son extemporáneos.

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), proferido por el JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO